



[AVE a Andalucía: El Caos se Vuelve Crónico por la Inacción del Gobierno ante los Robos](#)

AEC

13/07/2026

La alta velocidad española, otrora orgullo nacional, se ha convertido en una lamentable metáfora de la gestión gubernamental: un servicio cada vez más impredecible, vulnerable y que abandona a sus usuarios. Este domingo, miles de viajeros del **AVE Madrid-Andalucía** volvieron a ser víctimas del caos, con retrasos significativos debido a un nuevo robo de cable de fibra óptica entre La Venta La Inés y Brazatortas (Ciudad Real). No es un hecho aislado; es la crónica de un fracaso anunciado y la prueba fehaciente de la inacción del Ministerio de Transportes y de Adif para proteger una infraestructura crítica.

Una Crisis Anunciada y Sistemática

La comunicación de Adif, como ya es costumbre, se limitó a un escueto mensaje en redes sociales, confirmando la incidencia y prometiendo una solución «a la mayor brevedad». Una promesa vacía para los pasajeros varados, que ven cómo la excepción se ha convertido en una norma insoportable.

«Por robo de cable entre Venta La Inés y Brazatortas, se están registrando retrasos en los trenes que circulan por la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía. Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad.»

– INFOAdif, cuenta oficial en 'X', 12 de julio

Este incidente es el último de una oleada que azota con especial virulencia el corredor sur. Hace apenas dos días, otro sabotaje en la comarca toledana de La Sagra provocó el mismo caos. La propia Adif reconoció la semana pasada un «aumento de los robos», con nueve incidencias a nivel nacional, tres de ellas concentradas en el mismo tramo entre Toledo y Ciudad Real. La pregunta es obligada: si el problema está identificado y localizado, ¿por qué no se actúa con contundencia?

La Realidad

Mientras el Ministerio de Transportes se enzarza en polémicas ideológicas y batallas en redes sociales, la realidad es que es incapaz de garantizar la seguridad en una de las líneas de AVE más importantes del país. La recurrencia de los robos en el mismo punto geográfico no denota un problema de delincuencia, sino una flagrante negligencia en la vigilancia y protección de la

infraestructura.

La Factura de la Incompetencia: Cifras que Alarman

La pasividad tiene un coste que pagan todos los españoles, no solo los usuarios afectados. El vandalismo y el robo de material ferroviario no son una anécdota, sino una sangría económica y un riesgo para la seguridad. Las cifras oficiales, aunque maquilladas, son demoledoras y exponen la magnitud del descontrol.

Dato Clave

Según datos publicados, el robo de cable le costó a Adif más de **16,6 millones de euros solo en 2023**, un año récord en sustracciones. Este coste no solo incluye la reposición del material, sino también las compensaciones a viajeros y los sobrecostes operativos derivados del caos. ([Fuente: La Razón, 01/02/2024](#)).

La indignación ciudadana es más que justificada. Comentarios en redes sociales como «vamos a robo de cable por día... y siempre en la línea de Andalucía» o «¿Otra vez... Siempre en la misma línea?» reflejan el hartazgo de unos clientes que pagan por un servicio 'premium' y reciben una prestación tercermundista. Los retrasos de hasta dos horas no son solo una molestia; son pérdidas económicas, reuniones de trabajo canceladas y planes personales arruinados por la incapacidad del Estado de cumplir su función más básica: garantizar la seguridad y el funcionamiento de los servicios públicos que gestiona.

Apunte sobre la Responsabilidad

La Ley del Sector Ferroviario (Ley 38/2015) establece claramente la responsabilidad del administrador de infraestructuras (Adif) de mantener la red en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad. La reiteración de incidentes en zonas concretas podría dar lugar a reclamaciones patrimoniales contra el Estado por un funcionamiento anormal de los servicios públicos, al no poner los medios necesarios para evitar un daño previsible y recurrente.

En definitiva, lo ocurrido este domingo no es un accidente, sino un síntoma de una enfermedad más profunda: la de un Gobierno más preocupado por la propaganda que por la gestión eficaz. La seguridad de nuestras infraestructuras no puede depender del azar. Exige inversión, estrategia y, sobre todo, responsabilidad política. Una responsabilidad que, hasta ahora, brilla por su ausencia.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CONTRIBUYENTES